Resolución 438/2001

Establécese que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, desarrollará todas las acciones tendientes a impulsar por todos los medios jurídicos y materiales disponibles, el progreso sociolaboral de personas con discapacidad.

Bs. As., 14/8/2001

VISTO lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 14.250, incorporado por la Ley N° 25.250, el artículo 1° del Decreto N° 1174 del 11 de diciembre de 2000 y la Resolución MTE y FRH. N° 309 del 7 de junio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que dicha resolución dispone la convocatoria a las partes comprendidas en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos celebrados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 23.545 y vigentes por ultra-actividad.

Que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis preceptúa que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”.

Que asimismo el artículo 75 inciso 23 de nuestra Ley fundamental dispone que “se deberá legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Que la necesidad y el derecho de las personas con discapacidad a la formación y readaptación profesional, a obtener, conservar y progresar en un empleo digno, productivo y remunerativo es inherente a la condición humana de conformidad a lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pactos, Convenios y Declaraciones que en su consecuencia se han dictado.

Que el que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social, forman parte de los postulados de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos (Resolución 3447 —XXX— del 9 de diciembre de 1975).

Que las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas señala que los Estados, las Organizaciones de Trabajadores y los Empleadores deben cooperar para asegurar condiciones equitativas en materia de políticas de contratación y ascenso, condiciones de empleo, etc.

Que el Convenio N° 159 Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley N° 23.462 dispone en su artículo 4° que “Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.

Que asimismo, con referencia a la readaptación profesional y al empleo en su artículo 5° preceptúa que “Se consultará a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sobre la aplicación de dicha política y, en particular, sobre las medidas que deben adoptarse para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de readaptación profesional”. Agregando que “Se consultará asimismo a las Organizaciones Representativas constituidas por personas inválidas o que se ocupan de dichas personas”.

Que la Declaración Sociolaboral del Mercosur en su artículo 2º señala que "Las personas portadoras de necesidades especiales serán tratadas en forma digna y no discriminatoria, favoreciéndose su inserción social y en el mercado laboral...".

Que la encuesta realizada por el INDEC en Tierra del Fuego, en el marco de la prueba Piloto de la Encuesta Nacional sobre Personas con Discapacidad, establece que el 7,1% de la población de esa provincia posee algún tipo de discapacidad. La encuesta realizada en Capital Federal por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas estableció una estimación del 93,7% de desocupación en personas con discapacidad mental y del 81% en personas con discapacidad motora, sensorial y visceral. Siendo estas las únicas estadísticas oficiales existentes hasta la fecha. Las mismas revelan la acuciante situación del sector al que se refiere.

Que es decisión de este Ministerio impulsar por todos los medios jurídicos y materiales disponibles, el progreso sociolaboral del colectivo de personas con discapacidad.

Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92), modificada por las Leyes Nros. 24.190 y 25.233 y por el artículo 5º del Decreto N° 1174/00.

Por ello,

EL MINISTRA

DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:

Artículo 1º — El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos en el marco de sus misiones y facultades, desarrollará todas las acciones tendientes a la consecución del objetivo previsto en esta norma, exhortando a las partes comprendidas en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos celebrados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 23.545 y vigentes por ultra-actividad, o aquellas que bajo el régimen legal que correspondiere se renovaran o celebrasen, para que se acuerden cláusulas tendientes a favorecer la incorporación de las personas discapacitadas aptas para las tareas que se les asignen, contemplándose su capacitación, adaptación al puesto de trabajo y readaptación ante los cambios tecnológicos.

Art. 2º — Regístrese, Comuníquese, Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Patricia Bullrich.